

les, etc. -tamizados por una espesa pátina de moderación, eso sí- se han convertido felizmente en patrimonio de la colectividad. Pero muchos de los paradigmas esenciales de su identidad se encuentran en franca retirada. Por ejemplo, el del compromiso del intelectual.

Como mucho, buena parte de los intelectuales que hoy se siguen declarando progresistas tienden a leer con excesiva ligereza los versos de Celaya y ponen una P mayúscula donde el poeta colocó una minúscula. Toman Partido, se declaran ligados a la defensa -crítica o no- de un Gobierno que es ya casi un Régimen. El poeta vasco por contra, hablaba de un «tomar partido» menos enfático y por ello más profundo, sin mayúsculas.

Muchos otros se quedan más acá y aceptan gustosos la creciente hegemonía que en el terreno de la cultura están adquiriendo ideas liberales más o menos adaptadas a los tiempos (por cierto que anacronismo por anacronismo, no debiera resultar éste menos estridente que aquél).

Y suscriben la necesidad del intelectual comprometido consigo mismo, del artista comprometido con su obra, del pensador comprometido con la sociedad en su conjunto... la exigencia en suma, de la neutralidad del intelectual para preservar su legítima e inexcusable independencia, sin la cual no podría llevar a buen término la función que tiene socialmente encomendada.

Frente a la concepción del intelectual (in) orgánico, que trasmuta la defensa de unas ideas por la defensa de unas instituciones, o frente a la visión ñoña del intelectual como ser apesadumbrado por su responsabilidad, agotado tras fatigosas jornadas en las que ha de preservar continuamente su neutralidad contra toda amenaza de implicación, los versos de Celaya traen un justo aroma antiguo, que no viejo. Y recuerdan que en definitiva, el intelectual -como individuo «enteramente parecido a un ser humano»- no debiera tener ante la sociedad más privilegios sino más deberes, que cualquier otro ciudadano.

Recuerdo una «autoentrevista» de un autor tan poco sospechoso ideológicamente como Jardiel Poncela en la que éste se preguntaba a sí mismo si era feliz. Sobre poco más o menos se respondía que puesto que lo que más le divertía era escribir y que se le pagaba por ello, se le pagaba, en suma, para que se divirtiera.

Tiendo a pensar que el intelectual es como trabajador y como ciudadano, un privilegiado. Y heredero seguramente también de una fuerte tradición cristiana, aunque no esté en la obligación de devolver a la sociedad los beneficios de ese privilegio mediante la asunción de un compromiso.

En momentos desnortizados como los actuales quiero creer que es lícito el desconcierto, el cuestionamiento, las dudas y hasta el desánimo acerca de cómo pueda materializarse ese compromiso en la ética, la ideología o la política. Pero no limitarlo a la defensa de un esqueleto institucional o a la salvaguarda de una ilusoria neutralidad.

El Intelectual como inversor

Por Ludolfo Paramio*

Conviene ante todo especificar qué es un intelectual. Parece evidente que con esta figura no nos referimos a las personas cualificadas intelectualmente en general, y que semejante cualificación es cuando menos discutible en el caso de algunas de las personas que aparecen como tales en los medios. La figura, hoy, parece referirse a quienes, moviéndose en el mundo de la cultura en su sentido más amplio, poseen y cultivan una cierta influencia en la opinión pública.

La cuestión del compromiso de los intelectuales se podría ver, desde esta

perspectiva, como un problema que no atañe sólo a las personas de un cierto peso cultural e intelectual, sino más en general a quienes tienen por sí mismos, y no por su actividad política, capacidad de formar opinión, para que sus opiniones particulares tengan una repercusión en los medios y, a través de ellos, en la opinión de otras personas. En este sentido más amplio, la cuestión del compromiso político de los intelectuales no sería distinta a la del compromiso político de las grandes figuras del deporte o del toreo.

Sucede, sin embargo, que nadie se interroga sobre la relación entre los grandes deportistas y la política, o entre los toreros famosos y la política. Puede que una de las razones sea la renuencia de los deportistas y toreros a tratar de influir en la opinión pública, al menos en lo referente a la

política, pero seguramente no es la única. Para ser reconocido como intelectual es preciso tener credibilidad y no sólo popularidad, y una credibilidad muy específica que parece ir ligada al mundo de la cultura, del arte, de la ciencia. Intelectual es quien se dedica a la búsqueda de la verdad, y por ello puede ser creído cuando toma posiciones sociales: pues no cabe pensar que lo haga por interés propio, sino en función de esa opción moral por la verdad.

Ahora bien, no es seguro que el afán por el conocimiento artístico o cultura, y ni siquiera por el conocimiento científico, garantice la superior racionalidad de la opinión propia: con cierta frecuencia ni siquiera garantiza un mínimo sentido común. Y, lo que puede ser más grave, no es evidente que los profesionales de la verdad estén libres de toda tentación.

* Ludolfo Paramio es Secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y presidente de la Fundación Pablo Iglesias.



"Los pícaros". Dirección: Agapito Martínez Paramio. Teatro del Azar. (1995). (Foto: Javier Valderas).

Hay filósofos morales capaces de grandes cochinadas en un concurso de cátedra, como hay creadores de vanguardia, ardientemente contrarios a la cultura oficial, capaces de remover cielo y tierra por lograr una subvención o un premio.

La popularidad puede ser, en este sentido, tan corruptora al menos como el poder o el dinero. Y puede deslumbrar especialmente a quienes por su profesión no están acostumbrados a ella: en este sentido, un actor que adquiere dimensión pública por su toma de posición política está más vacunado que el pensador o el probo funcionario del Estado. Al fin y al cabo, el actor ya sabe lo que es la Popularidad, ser reconocido por la calle, aparecer en los medios. En cambio, para quien ha adquirido reconocimiento social por su ejercicio profesional, en campos inicialmente alejados de la atención pública, el brusco protagonismo alcanzado al tomar partido puede crear adicción.

Convencido de que su popularidad es el reconocimiento social de un mérito propio, para el intelectual puede ser duro aceptar el ejercicio de la política como proyecto colectivo. Y no es extraño: el político tiene que aprender a sufrir procesos electorales y críticas muy destructivas, que el intelectual no tiene por qué soportar si ha consolidado una posición en su propio ámbito. Podríamos decir, en estos tiempos marcados por el protagonismo del mercado, que cuando el intelectual entra en política experimenta un súbito sentimiento de reconocimiento que vive como un *capital social* que pasa a formar parte de su patrimonio. Y desde ese momento, toda crítica, a él mismo o a la opción por la que ha tomado partido, aparece como una amenaza de perder ese capital, ante la que puede tener fácilmente la tentación, como algunos empresarios, de llevarse su capital a casa o a otra parte: de desinvertir.

Ése es el problema de los intelectuales ante la política: que es más fácil aconsejar a los demás sobre sus inversiones que comprometer el propio capital, especialmente cuando el mercado es impredecible. Sin embargo, hay momentos en que un intelectual honesto no puede dejar de tomar partido: ante una dictadura, o cuando está en juego un gran proyecto colectivo.

Pero, si se quiere hacer algo más que firmar manifiestos (o si se quieren firmar responsablemente, para evitar lo que podríamos llamar el *síndrome de Sartre*), la toma de partido no puede ser vivida como una aventura personal, como un juego de Bolsa, sino como una inversión que es preciso mantener también cuando las cosas van mal. Sobre todo, pensando en esos pequeños accionistas, los ciudadanos de a pie, que pueden perder sus ahorros por una acumulación de egoísmos patrimoniales.

El País, 23 de febrero de 1995

Una cuestión de profesión

Por Guillermo Gortázar*

Las recientes y espectaculares *deserciones* de la actividad política de dos magistrados, hasta hace poco diputados a Cortes, invita a la reflexión sobre la naturaleza de la actividad política y de las relaciones de los intelectuales, profesionales o independientes con el poder.

El problema de fondo en la participación de los intelectuales en el poder se deriva de la distinta naturaleza de la política y de la tarea intelectual. El político busca el poder y forma parte de lo que Mosca y Pareto definieron como clase política. Un político, como un empresario y tantas otras profesiones, tarda años en comprender y desarrollar las múltiples facetas de la acción política (el debate, la representación y defensa de intereses, el

discurso, los modernos medios de comunicación, etcétera). Por otra parte, el intelectual que irrumpe en la política tiene que adaptarse a una nueva profesión y se tiene que poner al servicio de un fin político, a través de un partido, en una monarquía parlamentaria. En otras palabras, el intelectual, como cualquier otro ciudadano, puede participar en política, pero tiene que convertirse en político, anteponer su nueva condición de político a la de intelectual. Si para un intelectual lo esencial es la búsqueda de la verdad absoluta, para un político lo importante son valores y principios y el permanente contraste de su programa político con la realidad y, por tanto, sometido al cambio y adaptable a cada época y circunstancia.

En España, la influencia de los intelectuales, considerados como chamanes, al margen de la política pero muy influyentes en la opinión y en el poder, no fue desta-

cada hasta los años veinte y treinta del siglo XX. Por el contrario, esa influencia no se produjo en el siglo XIX español. Desde 1834 lo mejor de la clase política generada en las Cortes de Cádiz y en la constitución del régimen liberal aseguraron una larga época de parlamentarismo y libertad, en medio de grandes dificultades militares y económicas.

En la historia reciente de España, la irrupción de la influencia política de los intelectuales, literatos, profesionales (Ortega, Azaña, Marañón) se produce en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera. Primo disolvió a la clase política de la Restauración, condujo a Alfonso XIII al exilio y produjo un vacío político que ocuparon los intelectuales y profesionales liberales como protagonistas de la acción política, en la Segunda República, en 1931. Aquella República, llamada con razón «de los intelectuales», fue una demostración de los

* Guillermo Gortázar es secretario de formación del Partido Popular.